

Monografías

La geodiversidad andaluza ante el reto del uso sostenible

El camino hacia la **Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía**

Sostenibilidad ambiental urbana



El camino hacia la Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía

Sentido y oportunidad de una nueva regulación en materia de Gestión y Protección Integral del Medio Ambiente

Desde la Conferencia de Estocolmo, en 1972, la de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, hasta la de Johannesburgo, en 2002, se viene planteando la necesidad de enfocar de forma equilibrada e integral las cuestiones relativas al medio ambiente y al desarrollo. El desarrollo sostenible es hoy uno de los referentes básicos que deben centrar los esfuerzos de la sociedad del siglo XXI.

Esta iniciativa legislativa, conocida como GICA, surge de la necesidad de avanzar hacia el desarrollo sostenible desde el punto de vista normativo, aportando claridad y ofreciendo un enfoque estratégico que induzca los cambios requeridos en nuestros modelos de producción y consumo para adaptarnos a los límites de la naturaleza y no al revés.

Con una amplia tramitación de más de dos años, en la que el anteproyecto de ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental ha sufrido numerosos cambios, el 26 de septiembre de 2006 es aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía como Proyecto de Ley y remitido al Parlamento de Andalucía.

Este proyecto de Ley, siguiendo el compromiso andaluz plasmado en La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible (2003) y el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010, así como los principios de la gobernanza, plantea la participación, el consenso y el compromiso político como elementos imprescindibles para impulsar con éxito actuaciones y políticas responsables con nuestro futuro común.

Estos principios han estado presentes en el procedimiento de elaboración del anteproyecto de Ley, caracterizado por una amplia participación social a través de los trámites de audiencia, en los que se recogieron más de 400 alegaciones que han sido valoradas y, en su caso, recogidas como modificaciones del texto. Así mismo se ha realizado un esfuerzo en el seno del Consejo Económico y Social para llegar a un consenso con los agentes sociales y económicos, de forma que las observaciones recogidas en el dictamen, aprobado por unanimidad por el citado órgano, también han quedado reflejadas en su contenido.

La GICA pretende completar el marco legal existente, siendo su principal norma de referencia la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.

En ella se instrumentan las directrices y estrategias de la Comunidad Autónoma para hacer frente a los problemas ambientales a escala regional. De espíritu horizontal y carácter integrador, como su nombre indica, esta norma se inicia con la previa asunción de la responsabilidad compartida, reinante tanto en la norma en sí, como en el procedimiento de su elaboración en el sentido anteriormente expresado, dando lugar a un nuevo enfoque en legislación.

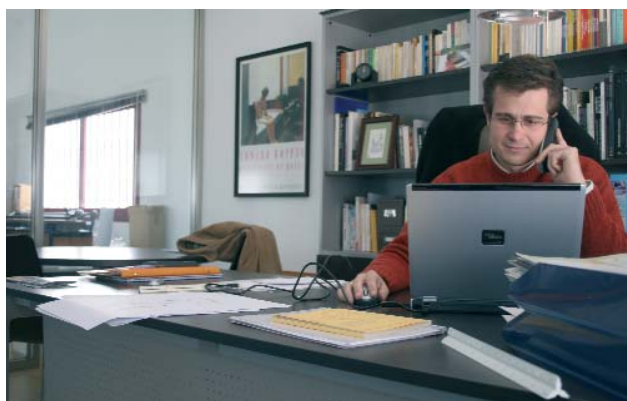


Parlamento de Andalucía

Este proyecto de Ley pretende dar respuesta a la dimensión ambiental, social y económica del desarrollo, aunando las normas sectoriales en pro de la protección del medio ambiente e introduciendo la variable ambiental en todas las políticas de la Junta de Andalucía.

Dota a la Administración andaluza de nuevos instrumentos de protección ambiental, con el doble objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma y obtener un alto nivel de protección del medio ambiente, poniendo especial énfasis en la coordinación institucional.

Se destacan nueve aspectos como las principales novedades de esta Ley, aunque se desarrollará su contenido en posteriores apartados:



Las empresas también han participado en la elaboración de la GICA

- Con una clara orientación hacia la prevención, la GICA crea y regula instrumentos que permiten conocer, a priori, los posibles efectos sobre el medio ambiente y la calidad de vida derivados de determinados planes, programas, proyectos de obras y actividades, incluidos los planes urbanísticos.
- Establece cinco instrumentos de prevención y control ambiental, aunando la distinción inicial entre ambos aspectos: autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada, evaluación ambiental de planes y programas, calificación ambiental y autorizaciones de control de la contaminación ambiental. La evaluación de impacto ambiental será necesaria para las tres primeras autorizaciones, actualizándose el Anexo de actuaciones que quedan sometidas a la misma.
- Uno de los aspectos que más han interesado del texto es la agilización de procedimientos. La denominada Autorización Ambiental Integrada (AAI), prevista en la directiva europea de prevención de la contaminación, integra en un solo trámite las diversas autorizaciones sectoriales. En el mismo sentido, la Autorización Ambiental Unificada integra en una resolución única, además de la evaluación de impacto ambiental, las autorizaciones y pronunciamientos ambientales exigibles para las actuaciones sometidas a la misma por la normativa sectorial con carácter previo a su implantación o puesta en marcha.

Su naturaleza de resolución administrativa que pone fin al procedimiento, además de permitir integrar otras resoluciones previstas en la normativa sectorial, abre la posibilidad de impugnar directamente -a través de la interposición del correspondiente recurso administrativo- el resultado de la evaluación ambiental; lo que hasta ahora sólo puede hacerse indirectamente dado que la Declaración de Impacto Ambiental o el Informe Ambiental se integran como informes en el procedimiento de la correspondiente autorización sustantiva.

- La Ley persigue favorecer la implicación ambiental del sector productivo mediante nuevas líneas de incentivos económicos y acuerdos voluntarios (por encima de las exigencias legales), recogiendo preceptos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea. En este sentido, se crea un distintivo destinado a aquellas empresas que, además de acreditar el cumplimiento de la normativa vigente, se comprometan también a aplicar procesos adicionales de minimización de residuos, reutilización, reciclaje y ahorro de agua y energía. Con este sello de calidad, se pretende respaldar a las empresas en sus procesos de modernización ambiental.
- Se regula por vez primera en Andalucía la contaminación lumínica. Se sientan las bases para una zonificación del territorio y el establecimiento de niveles de iluminación en función de cada zona, teniendo en cuenta la compatibilidad de los intereses municipales y empresariales con los científicos, ecológicos y de ahorro energético.
- De acuerdo con las directivas europeas, se actualizan los objetivos de calidad ambiental relativos a residuos, aire, agua, suelos y ruido:
 - En relación con la contaminación acústica, el proyecto también recoge una nueva zonificación en la que se incorpora la posibilidad de designar servidumbres acústicas y que servirá de marco legal para la realización de mapas de ruido y planes contra la contaminación acústica.
 - En cuanto a la gestión de los residuos, el objetivo prioritario se dirige a minimizar su producción en origen y fomentar la reutilización y reciclado. Para ello se establecen líneas de incentivos a la inversión en tecnologías limpias y la prohibición del depósito en vertederos de todos aquellos desechos que sean susceptibles de una valorización previa.

- En cuanto a la calidad de las aguas, facilita un marco global para la protección de las aguas continentales, litorales, costeras y de transición siguiendo lo dispuesto en la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre.
- Respecto de la calidad ambiental de los suelos, se establece una regulación que incluye la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
- El Proyecto de Ley establece garantías que refuerzan la participación social y el acceso de los ciudadanos a una información ambiental objetiva y fiable, así como la difusión de la información, la educación ambiental y la concienciación ciudadana en materia de Medio Ambiente.
- La ley racionaliza, completa y actualiza el régimen de vigilancia e inspección y configura un conjunto de infracciones y sanciones que tienen como fin último lograr que se respete con máxima eficacia el principio de quien contamina paga y la restauración de los daños ambientales que se produzcan. La determinación de las responsabilidades en cada caso y la fijación de los comportamientos que se consideran infracción administrativa son parte de los cometidos obligados de este texto normativo que tiene en la actualización uno de sus máximos propósitos.
- Finalmente, el proyecto fija un régimen de responsabilidad medioambiental en virtud del cual la Administración Autonómica podrá exigir garantías financieras para atender los daños ambientales provocados por determinadas actividades profesionales o económicas, entre ellas, las sometidas a autorización ambiental integrada.

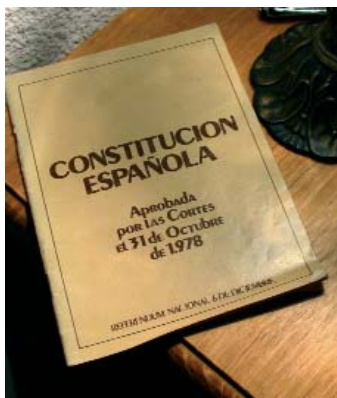
Punto de partida, situación actual, y necesidad de la Ley

Fundamento Constitucional y Estatutario de la protección integral del Medio Ambiente

Nuestra Constitución, de 27 de diciembre de 1978, consagra en su artículo 45, como facultad inherente e irrenunciable de la ciudadanía el Derecho al Medio Ambiente y así, en el artículo 45 de la misma se dice:

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un Medio Ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el Medio Ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.



Constitución Española de 1978 y Nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía

En el marco de sus propias competencias, el anterior Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, establecía como uno de sus objetivos básicos el fomento de la calidad de vida del pueblo andaluz, mediante la protección de la naturaleza y del Medio Ambiente.

Nuevo Estatuto de Autonomía

El Proyecto de Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental se ha gestado paralelamente a un momento de absoluta transformación de la norma institucional básica que es marco de convivencia de los andaluces:

Sometido a Referéndum y aprobado el día 18 de febrero de 2007, en palabras de su Exposición de Motivos, se dice: *hoy, los argumentos que construyen la convivencia de los andaluces y andaluzas y los anhelos de éstos nacen de un nuevo proyecto histórico que debe permitirnos afrontar con garantías los retos de un tiempo nuevo, definido por los profundos cambios geopolíticos, económicos, culturales y tecnológicos ocurridos en el mundo y por la posición de España en el contexto internacional. Si durante el último cuarto de siglo se han producido transformaciones intensas en el mundo, estos cambios han sido particularmente acentuados en Andalucía, donde en ese período hemos pasado del subdesarrollo económico y cultural a un panorama similar al de las sociedades más avanzadas, como ejemplifica la inversión de nuestros flujos migratorios.*

Es precisamente desde esta adaptación a los nuevos tiempos, donde el nuevo Estatuto de Autonomía pretende, en la medida de sus posibilidades, dar solución a los nuevos problemas del Siglo XXI a los que nos enfrentamos.

De este modo, el nuevo artículo 10,3 7º establece como objetivo digno de protección la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas, mediante la protección de la naturaleza y del Medio Ambiente, la adecuada gestión del agua y la solidaridad interterritorial en su uso y distribución.

Finalmente, por su especial trascendencia y por la verdadera importancia que el Parlamento de Andalucía le ha querido conferir al Medio Ambiente, resulta especialmente inspirador y motivador el hecho de que se haya dado un Título completo (concretamente, el Título VII) dedicado en exclusividad al Medio Ambiente, donde se establecen las bases esenciales y el derecho ya irrenunciable de todos los andaluces a vivir en un Medio Ambiente protegido por la propia ciudadanía y por los Poderes Públicos, haciendo efectivo el consabido principio de corresponsabilidad compartida.

Propósitos esenciales de la Ley

Objeto

El objeto del Proyecto de Ley, tal y como viene establecido en su artículo 1, lo constituye el hecho de establecer un marco normativo adecuado para el desarrollo de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de los instrumentos que garanticen la incorporación de criterios de sostenibilidad en las actuaciones sometidas a la misma.

Fines

Entre los fines destacan por su importancia y, siguiendo el orden estructural del Proyecto, el hecho de pretender alcanzar un elevado nivel de protección del Medio Ambiente en su conjunto para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizar el acceso de la ciudadanía a una información ambiental, así como una mayor participación social en la toma de decisiones medioambientales, promover el desarrollo y potenciar la utilización por el sector industrial y la sociedad en general de los instrumentos y mecanismos voluntarios para el ejercicio de una responsabilidad compartida que mejore la calidad ambiental, incluso establecer los instrumentos económicos que incentiven una disminución de la incidencia ambiental de las actividades sometidas a esta ley y por último regular un sistema de responsabilidad y reparación por daños al Medio Ambiente.

Principios

Los principios que inspiran el Proyecto son:

- Principio de utilización racional y sostenible de los recursos naturales para salvaguardar el derecho de las generaciones presentes y futuras a la utilización de los mismos.
- Principio de responsabilidad compartida de las Administraciones públicas y la sociedad en general, implicándose activamente en la protección del Medio Ambiente.
- Principio de información, transparencia y participación, por el que en las actuaciones en materia de Medio Ambiente se ha de garantizar el libre acceso de la ciudadanía a una información objetiva, fiable y concreta, que permita una efectiva participación de los sectores sociales implicados.
- Principio de promoción de la educación ambiental, que tiene por objeto la difusión en la sociedad de conocimientos, información, actitudes, valores, comportamientos y habilidades encaminadas a la protección del Medio Ambiente.
- Principio de prevención, que supone adoptar las medidas necesarias para evitar los daños al Medio Ambiente preferentemente en su fuente de origen, antes que contrarrestar posteriormente sus efectos negativos.
- Principio de enfoque integrado, que supone el análisis integral del impacto ambiental de aquellas actividades industriales de alto potencial contaminante.



Restauración de taludes

- Principio de cautela, por el cual se recomienda la adopción de medidas de protección del Medio Ambiente tras una primera evaluación científica en la que se indique que hay motivos razonables para entender que del desarrollo de una actividad podrían derivarse efectos potencialmente peligrosos sobre el Medio Ambiente y la salud de las personas, los animales y las plantas.
- Principio de quien contamina paga, conforme al cual los costes derivados de la corrección de los daños ambientales corresponden a los responsables de los mismos.
- Principio de adaptación al progreso técnico mediante la promoción de la investigación, desarrollo e innovación en materia ambiental, que tiene por objeto la mejora en la gestión y control de las actividades mediante la utilización de las mejores técnicas disponibles menos contaminantes o menos lesivas para el Medio Ambiente.
- Principio de restauración, que implica la restitución de los bienes, en la medida de lo posible, al ser y estado anteriores a los daños ambientales producidos.
- Principio de coordinación y cooperación por el cual las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberán guiar sus actuaciones en la ejecución de sus funciones y relaciones recíprocas, así como prestarse la debida asistencia para lograr una mayor eficacia en la protección del Medio Ambiente.

Reconocimiento en el Proyecto de Ley a la Información y Participación Pública en materia de Medio Ambiente

El Proyecto de Ley establece garantías que refuerzan la participación social y el acceso de los ciudadanos a una información ambiental objetiva y fiable, así como la difusión de la información, la educación ambiental y la concienciación ciudadana en la protección del Medio Ambiente.

Ciertamente, va más allá de la implicación del sector productivo andaluz, pues refuerza de modo cualitativo la participación pública y el acceso a la información en materia medioambiental, recogiendo el derecho de los ciudadanos a recibir información y la obligación de la Administración a suministrarla.

De este modo, regula, tras las disposiciones generales, en su Título II, la información y participación en materia de Medio Ambiente, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2003/4/CE, de 28 de enero, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental, así como en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente.

En las garantías concretas que se articulan en materia de información a los ciudadanos, se establecen además del derecho a la información los siguientes instrumentos para llevarlo a cabo con efectividad:

Garantías en materia de información ambiental

Se prevén actuaciones tendentes a garantizar una información ambiental de calidad para la ciudadanía:

- Informar de manera adecuada sobre los derechos de acceso a la información ambiental y de las vías para ejercitar tales derechos de acuerdo con la legislación vigente.
- Poner a disposición de los titulares del derecho de acceso a la información ambiental aquella que soliciten, en los términos establecidos en la normativa vigente, garantizando el principio de agilidad en la tramitación y resolución de las solicitudes, así como que su personal les asista cuando traten de acceder a la misma.
- Estructurar y mantener actualizada la información ambiental que sirva de base a las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en sus funciones de planificación y gestión, para su utilización por la ciudadanía.
- Facilitar y difundir la información ambiental, por todos los sistemas a su alcance, particularmente mediante el empleo de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, prestando asesoramiento en la medida que resulte posible.
- Elaborar listas, accesibles a la ciudadanía, de autoridades públicas en atención a la información ambiental que obre en su poder.
- Realizar campañas de información específicas cuando existan hechos excepcionales relacionados con el Medio Ambiente que por su relevancia deban ser conocidos por la ciudadanía y supongan la adopción de medidas concretas por la Administración.

Informe sobre el estado del medio ambiente y Red de Información Ambiental de Andalucía

Como instrumento para facilitar y difundir la información ambiental, el Proyecto de Ley establece de modo obligatorio la publicación periódica por la Consejería competente en materia de medio ambiente de un Informe de carácter general sobre el estado del Medio Ambiente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Así mismo, se crea la *Red de Información Ambiental de Andalucía*, que tendrá como objeto la integración de toda la información alfanumérica, gráfica o de cualquier otro tipo sobre el medio ambiente en Andalucía generada por todo tipo de centros productores de información ambiental en la Comunidad Autónoma para ser utilizada en la gestión, la investigación, la difusión pública y la toma de decisiones, correspondiendo a la Administración de la Junta de Andalucía velar porque la ciudadanía tenga acceso a dicha Red.

Participación pública en asuntos con incidencia medioambiental

La Administración de la Junta de Andalucía toma en el nuevo Proyecto de Ley, como obligación que tiene que cumplir de modo inexcusable, velar porque:

- Se informe a la ciudadanía, a través de los medios apropiados, sobre cualquier iniciativa de elaboración de propuestas de planes y programas medioambientales.
- Que la ciudadanía pueda formular observaciones y alegaciones antes de que se adopte la decisión sobre el plan, programa o disposición de carácter general, y que éstas sean debidamente tenidas en cuenta por la Administración Pública.
- Que se informe a la ciudadanía del resultado definitivo de las decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones en los que se basan las mismas.
- Por otro lado, tales derechos se articulan de modo expreso, obligando a las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía a garantizar, a través de la información pública y la audiencia a las personas interesadas, la participación en los procedimientos administrativos de autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada, evaluación ambiental de planes y programas y calificación ambiental.

Instrumentos de Prevención y Control Ambiental

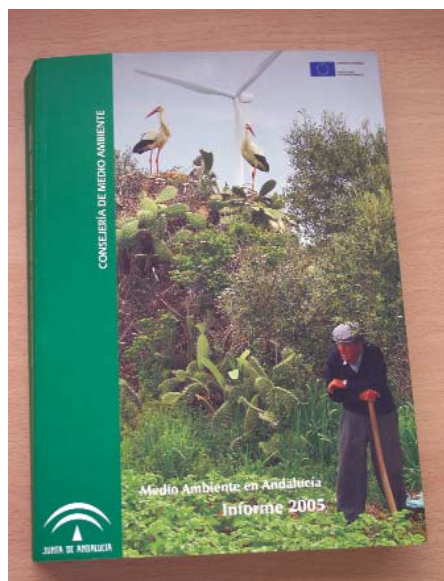
El Proyecto establece cinco instrumentos de prevención y control ambiental para hacer cumplir el compromiso de avanzar hacia la sostenibilidad.

La Autorización ambiental integrada

Destaca en el Proyecto de Ley, la incorporación del enfoque integrado que propugna la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación y la transposición a nuestro derecho interno que efectúa la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

La autorización ambiental integrada tiene por objeto:

- Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.
- La utilización de manera eficiente de la energía, el agua, las materias primas y otros recursos.
- Integrar en una resolución única, además de los pronunciamientos, decisiones y autorizaciones previstos en la legislación básica en materia de prevención y control integrados de la contaminación, aquellos otros que correspondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente y que sean necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de las actividades.



Informe de Medio Ambiente de Andalucía, 2005

En palabras de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, esta visión obliga a una profunda renovación de los instrumentos de intervención administrativa de la normativa autonómica en una triple dimensión. En primer lugar, se aborda la incidencia ambiental de una serie de instalaciones industriales, evitando o reduciendo la transferencia de contaminación de un medio a otro; de otro lado, se lleva a cabo una simplificación administrativa de procedimientos tendente a que el resultado de la evaluación global de la actividad culmine en una resolución única, la autorización ambiental integrada, y, por último, se determinan en la autorización los valores límites exigibles de sustancias contaminantes conforme a las mejores técnicas disponibles en el mercado para conseguir el menor impacto ambiental, entendiendo por éstas las que sean, además, viables económicamente, sin poner en peligro la propia continuidad de la actividad productiva de la instalación.

Por ello, con el objetivo de lograr la simplificación y la integración de procedimientos para las actividades industriales con mayor incidencia ambiental, que quedan identificadas en el Anexo I de esta norma como actividades sometidas a AAI y que coinciden con aquellas a las que la normativa europea y española somete a prevención y control integrados de la contaminación (IPPC), se establece en este proyecto que todos los pronunciamientos de la Administración ambiental quedan integrados en uno solo, denominándose Autorización Ambiental Integrada.

Se trata, por tanto, de integrar en una única resolución y en un único procedimiento las diversas autorizaciones reguladas en la normativa sectorial para el control ambiental de las emisiones a la atmósfera, los vertidos, residuos y otras que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente y que tienen que ser necesariamente emitidas con carácter previo, como pueden ser las relativas a vías pecuarias, espacios naturales protegidos, terrenos forestales y, en todo caso, la evaluación de impacto ambiental.

Autorización ambiental unificada

Junto con la Autorización Ambiental Integrada, se crea la *Autorización Ambiental Unificada*, a otorgar por la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Respondiendo al mismo planteamiento que la AAI, la autorización ambiental unificada (AAU) también tiene como objetivo evitar o, cuando esto no sea posible, reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo y otras incidencias ambientales de las actuaciones identificadas en el Anexo I como actuaciones sometidas a la misma. También tiene como propósito recoger en una única resolución las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que correspondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente y que resulten necesarios con carácter previo para la implantación y puesta en marcha de estas actuaciones.



Actividades económicas

Se unifican también así, en el sentido ya comentado, en una sola autorización todos los pronunciamientos ambientales sobre determinadas actuaciones de acuerdo con las normas sectoriales que, en función de su naturaleza, resulten de aplicación, incluida la técnica de evaluación ambiental de acuerdo con los requisitos procedimentales y de fondo establecidos en la normativa básica en materia de evaluación de impacto ambiental.

A título de ejemplo, se pretende unificar e integrar en un solo procedimiento y resolución la evaluación de impacto ambiental, la autorización de montes, de espacios naturales, de vertidos, de vías pecuarias, de residuos, de atmósfera, etc.

A partir de la entrada en vigor de esta iniciativa legislativa, desde que el promotor presenta un proyecto los plazos de resolución del procedimiento de las distintas autorizaciones y pronunciamientos que se integrarán en la AAU comienzan a la vez, y no sucesivamente como ocurre en la actualidad. Por ello el promotor, junto con la solicitud de la AAU, además del proyecto técnico y el informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico, deberá presentar un estudio de impacto ambiental y la documentación exigida por la normativa aplicable para aquellas autorizaciones y pronunciamientos que en cada caso se integren en la AAU.

Además, para determinadas actuaciones que quedan identificadas en el Anexo I se establece un procedimiento abreviado con un plazo máximo de resolución de seis meses (suponen aproximadamente el 60% de las sometidas a AAU). Para el resto el plazo se fija en ocho meses.

Así mismo, se prevé la participación en el procedimiento a través del trámite de información pública y audiencia y se regula el contenido de la autorización, así como su modificación y caducidad.

Respecto del ámbito de aplicación de esta autorización hay que indicar que, además de las actuaciones señaladas en el Anexo I y las modificaciones sustanciales de las mismas, están también sometidas a AAU, cuando así lo decida la Consejería competente en materia de medio ambiente mediante resolución motivada que deberá ser pública, las actuaciones públicas y privadas que puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la red ecológica europea Natura 2000, así como determinadas actuaciones y sus modificaciones sustanciales que sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se utilicen por más de dos años.

Cuando las actuaciones sometidas a AAU sean promovidas por la Administración de la Junta de Andalucía o entidades de derecho público dependientes de la misma, se someterán al mismo procedimiento, si bien se resolverá mediante la emisión de informe de carácter vinculante por la Consejería competente en materia de medio ambiente, pudiendo el órgano promotor, en caso de disconformidad con el mismo, plantear la resolución de su discrepancia ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

El Consejo de Gobierno, en supuestos excepcionales, incluidas las situaciones de emergencias y mediante acuerdo motivado que se hará público en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, podrá excluir de autorización ambiental unificada una determinada actuación, previo examen de la conveniencia de someter la misma a otra forma de evaluación. Dicho acuerdo de exclusión deberá contener las previsiones ambientales que en cada caso se estimen necesarias en orden a minimizar el impacto ambiental de la actuación excluida.

Evaluación ambiental de planes y programas

Como tercer instrumento de prevención y control ambiental, el Proyecto de Ley regula la evaluación ambiental de planes y programas, siguiendo las determinaciones de la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, incorporada a nuestro ordenamiento a través de la Ley 9/2006, de 28 de abril, cuyo objetivo consiste en la integración de los aspectos ambientales en la planificación incluida en su ámbito de aplicación.

En este sentido, se define la evaluación ambiental como el proceso que permite la integración de los aspectos ambientales en los planes y programas mediante la preparación del informe de sostenibilidad ambiental, la celebración de consultas, la valoración y consideración del informe de sostenibilidad ambiental y de los resultados de las consultas, la memoria ambiental y el suministro de información sobre las decisiones adoptadas respecto al contenido definitivo de los mismos.

El ámbito de aplicación de esta evaluación ambiental estratégica se proyecta sobre los planes y programas, así como sus modificaciones, que se elaboren o aprueben por la Administración de la Junta de Andalucía y cuya redacción y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno, señalados en el Anexo I de este proyecto de Ley; concretamente, aquellos que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos sometidos a AAI, AAU o calificación ambiental relativos, entre otras materias, a la agricultura, ganadería, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, turismo y ordenación del territorio.

También estarán sometidos a evaluación ambiental los planes y programas que requieran una evaluación en aplicación de la normativa reguladora de la Red ecológica europea Natura 2000.

Así mismo se someterán a evaluación ambiental las modificaciones menores de los planes y programas previstos en el apartado anterior, así como los planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito territorial cuando la Consejería competente en materia de medio ambiente, mediante resolución motivada que se hará pública, determine respecto de los mismos la existencia de efectos significativos en el medio ambiente de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa básica en esta materia.

Por último, se someten a evaluación ambiental los instrumentos de planeamiento urbanístico que se identifican en el ya citado Anexo I.

Por tanto, a través de los distintos trámites y actos que conforman este procedimiento se evaluará la sostenibilidad de la mayor parte de los instrumentos de planificación de actividades económicas aprobados por el Consejo de Gobierno, lo que obliga a todos los organismos públicos a trabajar de una manera coordinada y conjunta al abordar la planificación estratégica de Andalucía y adecuarla a la normativa ambiental.

Especial referencia al planeamiento urbanístico

En la GICA se regula un procedimiento específico para la evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico que, de conformidad con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, pueden clasificar el suelo en: urbano, urbanizable y no urbanizable (Planes Generales de Ordenación Urbanística, Planes de Ordenación Intermunicipal y los Planes Especiales que puedan afectar al suelo no urbanizable).

Este procedimiento responde a los mismos principios que el actual régimen de evaluación de impacto ambiental de los planes urbanísticos establecido en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. Así, se mantiene el estudio de impacto ambiental como documento que deberá integrarse en el plan que se formule y cuyo contenido queda regulado en el Anexo II B del proyecto de Ley.

Destaca como elemento clave de este procedimiento el *Informe de Valoración Ambiental*, que participa de las mismas características que la actual Declaración de Impacto Ambiental. Se define como el pronunciamiento del órgano ambiental competente sobre la integración de los aspectos ambientales en los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental. Este informe tendrá carácter vinculante y sus condicionamientos se incorporarán en la resolución que apruebe definitivamente el plan.

Se aprecian, pues, diferencias entre la evaluación ambiental de planes y programas y la evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

El primero, que participa de un carácter y requerimientos más generales, tanto en el nivel de procedimiento como en el de exigencia de detalle del análisis ambiental a realizar a través de informe de sostenibilidad ambiental, está previsto para instrumentos estratégicos como Planes de Ordenación del Territorio, Planes Sectoriales, etc. Se establece que dichos planes deberán tener en cuenta antes de su aprobación definitiva la preceptiva memoria ambiental, que se elaborará conjuntamente por la Consejería competente en materia de medio ambiente y por el órgano promotor para valorar la integración de los aspectos ambientales realizada durante el proceso de evaluación.



Ordenación del medio litoral

El segundo, atendiendo a la necesidad de que la planificación urbanística, ante su mayor concreción espacial, sea analizada en profundidad, exige un Estudio de Impacto Ambiental de contenido específico y otorga carácter vinculante al informe de valoración ambiental que emita la Consejería competente en materia de medio ambiente sobre la propuesta de plan urbanístico aprobado de forma provisional y sus condicionamientos se deben incorporar en la resolución que lo apruebe definitivamente.

De esta forma, se permite una evaluación en cascada: Evaluación Ambiental Estratégica para los Planes de Ordenación Territorial, donde se establecen directrices para los planeamientos urbanísticos que se sometan posteriormente a Evaluación Ambiental.

Calificación ambiental

La Calificación ambiental es definida en el Proyecto de Ley como el *informe resultante de la evaluación de los efectos ambientales, que se debe integrar en la licencia municipal*. La calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable para el otorgamiento de la licencia municipal correspondiente.

Este instrumento jurídico tiene por objeto la evaluación de los efectos ambientales de determinadas actuaciones, así como la determinación de la viabilidad ambiental de las mismas y de las condiciones en que deben realizarse.

Es una figura que pervive respecto del texto de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental y que se erige como un procedimiento integrado dentro del específico de la licencia de apertura de cualquier establecimiento o actividad sometido a calificación. Se produce así una fusión entre ambos procedimientos, con lo que se evita la duplicidad de trámites.

Sigue correspondiendo a los Ayuntamientos la tramitación y resolución del procedimiento de calificación ambiental, así como la vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a dicho instrumento.



Instalaciones industriales

Autorizaciones de control de contaminación ambiental

El Proyecto de Ley regula igualmente el régimen jurídico de las autorizaciones de control de la contaminación ambiental en materia de emisiones a la atmósfera, vertidos de aguas y producción y gestión de residuos.

De este modo, son autorizaciones de control de la contaminación ambiental a los efectos de esta ley las siguientes:

- Autorización de emisiones a la atmósfera.
- Autorización de vertidos a aguas litorales y continentales.
- Autorización de producción y gestión de residuos.

La Calidad Ambiental como valor y su plasmación en el texto legal

El Proyecto de Ley establece las garantías de protección de la calidad ambiental del aire, agua y suelos así como de la gestión de los residuos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por ello, este Proyecto también conforma como una de sus características el establecer los estándares mínimos de calidad ambiental fijados por las Directivas europeas para el aire, el agua y el suelo.

Calidad del Medio Ambiente atmosférico

En cuanto a la calidad del aire, la Ley se adapta a los objetivos marcados por la Directiva 96/62/CE, del Consejo, de 27 de septiembre, relativa a evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, y a la Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

Se han tenido en cuenta los objetivos establecidos por la Comisión Europea en la reciente Estrategia Temática sobre la Contaminación Atmosférica, la cual, tomando como base el Programa Aire Puro para Europa, recomienda la actualización de la legislación vigente sobre la materia, la mejor regulación sobre la presencia de los contaminantes más graves y la adopción de nuevas medidas dirigidas a integrar las cuestiones medioambientales en los demás programas y políticas.

Se regula por vez primera en Andalucía la contaminación lumínica con objeto de prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dispersión de la luz artificial hacia el cielo nocturno, estableciéndose las medidas necesarias para preservar las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas nocturnos; promover el uso eficiente del alumbrado; reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios residenciales; salvaguardar la calidad del cielo y facilitar la visión del mismo, en especial, en el entorno de los observatorios astronómicos.

Para ello, se sientan las bases para la realización por la Consejería competente en materia de medio ambiente y los municipios de una zonificación lumínica del territorio para el establecimiento de los niveles de iluminación adecuados a los usos y necesidades en función del área lumínica de que se trate.

Igualmente, en materia de contaminación acústica se establece una regulación que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, determina la zonificación del territorio en áreas acústicas, regula los mapas estratégicos y singulares de ruido, incorpora la posibilidad de designar servidumbres acústicas y establece el régimen aplicable en aquellas zonas en las que no se cumplan los objetivos de calidad acústica exigidos (zonas de protección acústica especial y de zonas acústicamente saturadas). Además, establece que la planificación territorial y el planeamiento urbanístico deberán tener en cuenta el régimen de contaminación acústica previsto en esta norma legal, en las disposiciones que la desarrollen y en las actuaciones administrativas realizadas en su ejecución, en especial, los mapas de ruidos y las áreas de sensibilidad acústica.

Por último, habilita a los municipios en el establecimiento de restricciones de uso de las vías y zonas públicas cuando se generen niveles de ruido que afecten o impidan el descanso de la ciudadanía, teniendo en cuenta los usos y costumbres locales.



Calidad atmosférica

Calidad del Medio Hídrico

En cuanto a calidad de las aguas, se desarrolla lo dispuesto en la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

En este sentido, se facilita un marco para la protección global de las aguas continentales, litorales, costeras y de transición, siguiendo los criterios empleados en dicha Directiva. Por otro lado, se contempla el establecimiento de programas de seguimiento del estado de las aguas y programas de actuación para determinados contaminantes, con objeto de prevenir la contaminación de origen difuso. Los programas serán de obligado cumplimiento una vez se aprueben y hagan públicos.

El Proyecto de Ley establece como fines concretos en relación con el medio hídrico:

- Prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres y humedales que dependan de modo directo de los acuáticos en relación con sus necesidades de agua.
- Proteger y mejorar el medio hídrico estableciendo medidas específicas para alcanzar en él concentraciones cercanas a los valores básicos, por lo que se refiere a las sustancias de origen natural, y próximas a cero, por lo que respecta a las sustancias sintéticas artificiales, mediante la interrupción o supresión gradual de los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.
- Garantizar la reducción progresiva de la contaminación de los acuíferos, así como de las aguas o capas subterráneas y evitar su contaminación adicional.
- Alcanzar los objetivos fijados en los acuerdos internacionales en orden a prevenir y eliminar la contaminación del medio ambiente marino.
- Evitar la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo o cualquier otra acumulación que pueda ser causa de degradación del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre.
- Alcanzar los objetivos medioambientales establecidos en la legislación vigente y, en particular, el buen estado de las aguas.



Laguna de la Dehesa de Abajo (Sevilla)

Así mismo, se establece el régimen jurídico de las autorizaciones de vertido en las aguas continentales y litorales, concretándose los supuestos de revisión de dicha autorización, así como las obligaciones de sus titulares.

Calidad ambiental del suelo

Respecto de la calidad ambiental de los suelos, se recogen y desarrollan en el Proyecto de Ley, aquellos aspectos contemplados en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

En relación con las actividades potencialmente contaminantes del suelo (que serán las establecidas en la normativa básica y aquellas otras que se determinen reglamentariamente) se establece la obligación de sus titulares de remitir a la Consejería competente en materia de medio ambiente, a lo largo del desarrollo de su actividad, informes de situación del suelo. También deberá presentar un informe de situación y obtener el informe favorable de la citada Consejería el propietario de un suelo en el que se haya desarrollado una actividad potencialmente contaminante del mismo cuando pretenda un cambio de uso o iniciar una nueva actividad.

La Consejería competente en materia de medio ambiente elaborará un inventario de suelos potencialmente contaminados en la Comunidad Autónoma en el que se incluirán los emplazamientos que estén o que pudieran haber estado afectados por actividades calificadas como potencialmente contaminantes de los suelos, así como todos aquellos supuestos en que se presuma la existencia de sustancias o componentes de carácter peligroso.

Los efectos de declaración por parte de la Consejería de Medio Ambiente de un determinado suelo como contaminado vienen igualmente establecidos en el Proyecto de Ley entre los que cabe destacar que la declaración y delimitación de un determinado suelo como contaminado corresponde a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente.

Para declarar un suelo como contaminado se tendrán en cuenta los criterios y estándares recogidos en la normativa básica y los que se determinen reglamentariamente en función de la naturaleza y de los usos del suelo.

La resolución que declare un suelo como contaminado contendrá, al menos, las siguientes determinaciones:

- Los sujetos obligados a realizar las operaciones de limpieza y recuperación, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.
- La delimitación del suelo contaminado.
- El plazo de ejecución de las operaciones de limpieza y recuperación.
- En su caso, las restricciones de uso de suelo.

Destaca también la inclusión en el Proyecto de Ley del hecho de dotar de publicidad formal frente a terceros a la declaración de contaminación de un suelo puesto que dicha Resolución será objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad a iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente.

Por lo que no cabrá, que el nuevo propietario del suelo alegue a su favor que no sabía de la declaración de existencia de calificación de ese suelo como contaminado.

Por otro lado se determina que los sujetos obligados a la limpieza y recuperación de los suelos declarados como contaminados deberán presentar un proyecto con las operaciones necesarias para ello, ante la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, para su aprobación.

Finalmente, tras la comprobación de que se han realizado de forma adecuada las operaciones de limpieza y recuperación del suelo contaminado, la Consejería declarará que el mismo ha dejado de estar contaminado, procediendo con ello a cancelar la nota marginal que figuraba en el Registro de la Propiedad.

Gestión de los residuos

El Proyecto de Ley, del mismo modo, establece una regulación específica de los residuos, con el objeto de amparar legalmente la necesidad de fomentar el aprovechamiento y la valorización, frente a la eliminación en vertederos. En este sentido, se recoge como prioridad en el modelo de gestión y, por este orden, minimizar su producción en origen y fomentar su reutilización y reciclado y se determina que reglamentariamente se establecerá un catálogo de residuos y el tratamiento en función de sus características.



Residuos de construcción y demolición

Se regula específicamente la gestión de residuos en vertederos, estableciéndose las normas generales de los depósitos de residuos en vertederos, los requisitos exigibles para su admisión en las distintas clases de vertederos y las condiciones de explotación de los mismos. En este ámbito se opta claramente por asegurar que los residuos que vayan a un vertedero sean sólo aquellos que hayan sido tratados previamente. Esta desincentivación del depósito en vertederos también viene aplicada con carácter general a los residuos peligrosos que sean susceptibles de valorización, sin la que no podrán ser depositados.

Además, se somete a autorización, aplicando los principios de precaución, proximidad y eficacia, el traslado de residuos peligrosos fuera de Andalucía.

Respecto a la producción y gestión de residuos, se regula el régimen de las autorizaciones de producción de residuos peligrosos y de gestión de residuos y se establecen las obligaciones de los productores de residuos peligrosos y de los titulares de las actividades de gestión de residuos, así como el objeto, composición y funciones de los sistemas integrados de gestión.

Se obliga además a los municipios y polígonos industriales a disponer de puntos limpios para la recogida selectiva, debiendo los instrumentos de planeamiento urbanístico incluir la reserva de suelo necesario para su construcción. También se exige respecto de las grandes superficies comerciales la adopción de las medidas necesarias para facilitar la recogida selectiva de todos los residuos generados en la actividad.

En el caso de los residuos de construcción y demolición (RCD) se opta igualmente por dar una solución definitiva al problema de los vertidos de escombros. Para ello se exige que los proyectos de obras sometidos a licencia municipal incluyan la estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se va a producir y el destino de los mismos, así como medidas para su clasificación y separación por tipo en origen.

Los Ayuntamientos condicionarán el otorgamiento de la licencia a la constitución por parte del productor de estos residuos de una fianza o garantía financiera equivalente que responda de la correcta gestión de los mismos. El destino de estos residuos será preferentemente y por este orden: su reutilización, reciclado u otras formas de valorización y sólo, como última opción, su eliminación en vertedero. Se ha adoptado como prioridad en el modelo de gestión de los mismos y, por este orden, minimizar su producción en origen y fomentar su reutilización y reciclado.

Instrumentos voluntarios para la mejora ambiental

Resulta comprensible que, una vez que concluya el proceso de creación de la Ley y entre en vigor, será necesario que las empresas y todos aquellos agentes económicos y sociales que desarrollen actividades susceptibles de poder contaminar deban adaptarse a las exigencias del nuevo texto legal. Por ello, se establece primero un periodo de vacatio legis o de entrada en vigor de la Ley de seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que todos los destinatarios de la norma conozcan con suficiente antelación las nuevas obligaciones de carácter jurídico.

Acuerdos y controles voluntarios

Se pretende favorecer el ejercicio de la responsabilidad compartida entre las Administraciones públicas y la sociedad en la protección del Medio Ambiente, con nuevos instrumentos capitales marcados ya en la Estrategia de Desarrollo Sostenible por el VI Programa de la Unión Europea.

En este sentido, se potencia el desarrollo de instrumentos y mecanismos como los acuerdos voluntarios, se crea un distintivo de calidad ambiental para las empresas andaluzas y se prevén incentivos para la inversión y para medidas horizontales de apoyo para fomentar todas aquellas actividades que faciliten directa o indirectamente la mejora de la calidad del medio ambiente.

Dichos acuerdos voluntarios podrán ser:

- Acuerdos celebrados entre los agentes económicos y sociales y la Consejería de Medio Ambiente u otros órganos de administración de la Junta de Andalucía.
- Compromisos del sector industrial con alguno de los órganos que integran la Administración de la Junta de Andalucía.
- Acuerdos que tengan por objeto la protección del Medio Ambiente celebrados entre personas físicas o jurídicas y la Consejería de Medio Ambiente u órganos que integran la Administración de la Junta de Andalucía.

También la Ley marca una serie de instrumentos (sistemas de gestión y auditorías ambientales, normas ISO o UNE y etiquetado ecológico) para llevar a cabo controles voluntarios.

Distintivo de calidad ambiental

El Proyecto crea asimismo lo que se denomina distintivo de calidad ambiental, que tiene como objetivos esenciales:

- Fomentar la inversión de las empresas en la promoción, el diseño, la producción y comercialización, el uso y el consumo eficiente de aquellos productos y servicios que: favorezcan la minimización en la generación de residuos o la recuperación y reutilización de los posibles subproductos, materias y sustancias contenidos en los mismos; sean producidos con subproductos, materias o sustancias reutilizadas o recicladas y que comporten un ahorro de recursos, especialmente de agua y energía.
- Proporcionar a los usuarios y a los consumidores una información fiable de las empresas sobre su aportación a la consecución de objetivos de desarrollo sostenible, así como sobre la calidad de los productos y servicios que ponen en el mercado en relación con su interacción en el medio ambiente.

Sistema de Responsabilidad Medioambiental

La prevención como objetivo primario en el sistema de responsabilidad

El Proyecto de Ley de Gestión Integral de Calidad Ambiental establece, de acuerdo con la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, un régimen de responsabilidad medioambiental en relación con los daños ambientales y las amenazas

inminentes de tales daños causados por actividades económicas y profesionales, entendiéndose por tales las realizadas con ocasión de una actividad, económica, un negocio o una empresa, con independencia de su carácter público o privado y de que tenga o no fines lucrativos.

Este nuevo régimen de responsabilidad ambiental se asienta sobre dos pilares básicos:

- Prevención y evitación de daños ambientales: se establece la obligación de los titulares de estas actividades de adoptar las medidas necesarias para prevenir y evitar daños ambientales y de poner en conocimiento de la Consejería competente en materia de medio ambiente cualquier amenaza inminente de daño causada por el desarrollo de la actividad.
- Reparación de daños ambientales: se establece un régimen de responsabilidad objetiva e ilimitada para los titulares de determinadas actividades, entre ellas, las sometidas a autorización ambiental integrada y las relativas a gestión de residuos peligrosos, lo que implica la obligación de adoptar las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados por la actividad y para el resto un régimen responsabilidad subjetiva, es decir, la reparación de daños sólo será exigible cuando haya existido culpa o negligencia por parte del titular responsable de la actividad.

Así mismo los titulares de determinadas actividades deberán disponer de alguna garantía financiera para responder de sus obligaciones de prevención, evitación y reparación de daños ambientales. Para que la Administración pueda determinar el alcance y suficiencia de dicha garantía el titular de la actividad deberá elaborar un informe de evaluación de riesgos ambientales que recogerá tanto los riesgos susceptibles de generar algún daño ambiental como las medidas necesarias para prevenirlos.

De este modo, se articula un sistema de responsabilidad ambiental, que está basado en esencia en la prevención, con el objeto de constreñir a los ciudadanos que ejercen una actividad susceptible de contaminar en cualquiera de las formas descritas en el Proyecto de Ley a evitar y prevenir los daños ambientales que pueda producir su actividad.



Tareas de vigilancia ambiental

Régimen de sanciones. Disciplina Ambiental

Bajo la rúbrica de un mismo Título (Título VII *Disciplina Ambiental*) y en el mismo Capítulo (Capítulo III *Infracciones y Sanciones*), se establece un régimen unitario en el que, estando perfectamente separadas las diferentes materias que se ocupa de regular, otorga un tratamiento jurídico específico, autónomo y separado para cada una de las áreas de actuación o actividad que son objeto de control y seguimiento por parte de la Administración.

Ello proporciona una absoluta certeza jurídica en la medida en que desaparece la dispersión jurídica anterior, de modo que, consultando un único texto legal, cualquier ciudadano puede saber qué acciones u omisiones la Ley sancionará y la previsible imposición de pena como consecuencia de su incumplimiento.

Y de este modo el Proyecto de Ley subdivide el régimen de infracciones y sanciones diferenciado las siguientes materias:

- Autorización ambiental integrada y unificada.
- Calificación ambiental.
- Calidad del medio ambiente atmosférico.
- Calidad del medio hídrico.
- Calidad ambiental del suelo.
- Residuos.
- Entidades Colaboradoras de la Administración.
- Distintivo de Calidad Ambiental.

Por otro lado, se establecen sanciones pecuniarias que llegan hasta los 2.404.000 de euros, todo ello sin perjuicio de los gastos que derivados de la obligación del restablecimiento del medio natural perturbado a su estado original con anterioridad al acto contrario al medio ambiente que sea objeto de sanción.

Se describe con precisión el concepto de persona responsable, es decir, a quién se le va aplicar el régimen de sanción que se regula. Por otro lado, determina el Proyecto, previendo situaciones de indeterminación en relación a la identificación de la persona responsable, que cuando no fuera posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubieren intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria, no existiendo por tanto lagunas ni supuestos en los que un procedimiento sancionador concluya sin imposición de sanción por falta de identificación exacta de la persona concreta que cometió la infracción.

Medidas de carácter provisional como garantía de un proceso sancionador

Si en algún sector que regula el Derecho es necesaria la imposición de medidas provisionales que impidan que una determinada conducta dilatada en el tiempo sea particularmente nociva para el entorno en que nos desarrollamos, es precisamente en el ámbito del Medio Ambiente, ya que mientras concluye un procedimiento administrativo sancionador que, en determinadas ocasiones, resulta ser especialmente largo y complejo (denuncia, notificación, acuerdo, inicio instrucción con práctica de pruebas, audiencia al interesado, propuesta de resolución, resolución definitiva, recurso administrativo y, finalmente en muchos casos, inicio de un interminable proceso contencioso-administrativo ante los Juzgados y Tribunales), es necesario adoptar medidas para que cese la actividad o actuación denunciada y evitar así los efectos perjudiciales que de ella se derivan.



Instalaciones industriales

Es por ello por lo que el Proyecto de Ley, no obviando tales circunstancias, otorga a la Administración la posibilidad de imponer una serie de medidas que impiden, por un lado, la persistencia en el presunto abuso contra el medio ambiente y, por otro lado, el seguimiento del procedimiento administrativo sancionador con todas las garantías legales.

En consecuencia, en cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolverlo podrá acordar, entre otras, alguna o algunas de las siguientes medidas provisionales:

- Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones.
- Suspensión temporal de las autorizaciones ambientales para el ejercicio de la actividad.
- Parada de las instalaciones.
- Precintado de obras, instalaciones, maquinaria, aparatos, equipos, vehículos, materiales y utensilios.
- Retirada o decomiso de productos, medios, materiales, herramientas, maquinarias, instrumentos, artes y utensilios.
- Cualesquiera medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuación en la producción del riesgo o del daño.
- Prestación de fianza.

Restauración del daño al medio Ambiente

El Proyecto de Ley, finalmente y concluyendo esta monografía, no se queda únicamente, en la imposición de una sanción sino que obliga a reparar el daño causado, haciendo efectivo el principio de que quien contamina paga.

Para ello el Proyecto prevé dos hipótesis lógicas: que el daño sea reparable y, en segundo término, aquellos escenarios indeseables donde resulta ya absolutamente imposible la reparación del perjuicio causado, como consecuencia de la comisión de alguna infracción legalmente tipificada en esta materia.



Industria pesada

Así, los autores o responsables de las infracciones previstas en esta norma estarán obligados tanto a reparar el daño causado como a indemnizar los daños y perjuicios derivados del mismo.

El órgano competente para imponer la sanción lo será igualmente para exigir la reparación del daño causado. En la resolución administrativa correspondiente se especificará el plazo en el que el responsable debe llevar a cabo la reparación y, en su caso, la forma en que se debe hacer efectiva la misma.

La exigencia de restituir las cosas a su primitivo estado obligará al infractor a destruir o demoler toda clase de instalaciones u obras ilegales y a ejecutar cuantos trabajos sean precisos para tal fin, en la forma y condiciones que fije el órgano sancionador y ejecutor competente.

Cuando la imposición al infractor de la obligación de reparar el daño causado tenga que ejecutarse en bienes inmuebles, podrá ser objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad a iniciativa del órgano sancionador competente.

Cuando la reparación del daño no pudiera realizarse sobre el mismo elemento o en el mismo punto geográfico, dispone el Proyecto de Ley un mecanismo de reparación en equivalencia en virtud del cual el órgano competente podrá ordenar la compensación del daño, mediante el abono de indemnizaciones por parte del responsable y éstas se destinarán a la realización de medidas que permitan mejorar y compensar el bien dañado.

Se articula con ello un doble mecanismo: la imposición de una sanción y, con la finalidad, entre otras, de impedir situaciones ilícitas que pudieran resultar rentables, se establece la obligación de reparar el daño causado al medio ambiente y de indemnizar los daños y perjuicios derivados del mismo.

Valoración del Proyecto de Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental

El Proyecto de Ley analizado supone un evidente avance respecto a la situación en la que nos encontramos actualmente.

Reconoce e instrumentaliza jurídicamente la Calidad Ambiental como pilar básico del desarrollo sostenible y en él subyace la idea de que el crecimiento, la competitividad y la tan deseada convergencia han de fundamentarse precisamente en la sostenibilidad, puesto que, de lo contrario, se está hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras.

Es el resultado de un evidente esfuerzo legislador en sintonía con la adecuación a los estándares ambientales planteados por la Unión Europea.



La Alpujarra granadina

Se trata de una Ley, una vez que entre en vigor, que compila y unifica la legislación sectorial en las diferentes vertientes o formas de contaminación, teniendo una parte importante dedicada al control preventivo de las actividades con potencial impacto ambiental añadiendo eficiencia y rigor entre dimensiones básicas y complementarias. Así mismo enmarca el régimen jurídico de procedimientos administrativos e instrumentos de mejora de la calidad ambiental, acomete la disciplina ambiental y el régimen de responsabilidad en caso de incumplimiento en alguno de sus aspectos.

Con este Proyecto de Ley queda, en términos generales, revisada y actualizada la legislación autonómica, se simplifican y agilizan los procedimientos administrativos, al integrar en un único permiso todos los requisitos y autorizaciones, definiéndose con rango de Ley un instrumento específico que, operando en forma de red, contribuya a facilitar el ejercicio del derecho a recibir información por parte de los ciudadanos y la obligación de la Administración a suministrarla.

Esta nueva norma legal, supone un avance con respecto a la situación actual, en la medida en que obliga a las Administraciones a coordinarse internamente para hacer efectiva la solución integral de autorizaciones y demás instrumentos jurídicos de los que se dota, cuyos mecanismos

serán desarrollados reglamentariamente. Impulsa los acuerdos voluntarios, los distintivos e incentivos para la mejora de la calidad ambiental y regula aspectos tan novedosos para el Medio Ambiente en nuestro ámbito territorial como la contaminación lumínica o los residuos de construcción y demolición, en los que jugarán un importante papel los Ayuntamientos.

También, como valor intrínseco se ha de destacar que si algo ha caracterizado el proceso de gestación de este Proyecto ha sido la participación. De este modo, antes de ser presentado, el Proyecto ha pasado en dos ocasiones por el trámite de audiencia.

Cabe concluir que con esta nueva regulación legal sale reforzada la perspectiva de compromiso y responsabilidad compartida de la sociedad andaluza con su medio ambiente.



Río Castril (Granada)

